

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**  
Medellín, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

**SENTENCIA**

**Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez**

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: JHON JAIRO MOLINA PÉREZ
Demandados	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Litisconsorte Necesario por Pasiva	: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ENKA DE COLOMBIA S.A.
Radicado	: 05001 31 05 007 2018 00166 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social –Ineficacia traslado de régimen pensional de afiliado, pensionado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-
Decisión	: <b>Confirma</b> decisión absolutoria
Sentencia No	: 112

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## ANTECEDENTES

### Pretensiones:

Se solicita se **declare la ineficacia y/o nulidad del traslado o la afiliación**, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)., entendiéndose válida la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) sin solución de continuidad; se condene a PORVENIR S.A. y PROTECCION S.A. a trasladar a COLPENSIONES, el saldo de la cuenta de ahorro individual, rendimientos financieros y bonos pensionales; se ordene a COLPENSIONES aceptar el reingreso al RPMPD, se le condene a pagar **pensión de vejez** conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, mesadas adicionales, intereses moratorios o indexación, condenas ultra y extra petita, costas procesales.

### Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma, en términos generales que, el demandante nació el 6 de noviembre de 1954, efectuó cotizaciones a pensiones a través del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el entonces I.S.S., en mayo de 1997 suscribió vinculación a PORVENIR S.A. y en agosto de 1999 a PROTECCION S.A., sin que se le hubiera brindado la debida información clara y suficiente, especificando las ventajas y desventajas, consecuencias del traslado de régimen pensional, las condiciones en las que accedería a la pensión de vejez en cada régimen pensional. Solicitó el retorno al RPMPD recibiendo respuesta negativa del I.S.S. por estar a menos de 10 años para pensionarse. En noviembre de 2016 reclamó la pensión de vejez a PROTECCION S.A., ante la demora de la entidad, reiteró la solicitud el 6 de junio de 2017; siendo reconocida el 17 de julio de 2017, con efectos a partir del 2 de diciembre de 2016, en cuantía de \$2.590.798,69, con retroactivo pensional por

valor de \$15.763.483. Reclamó proyección pensional a PROTECCION S.A. el 6 de junio de 2017, recibiendo respuesta el 31 de julio del mismo año, donde se le informó que no era posible teniendo en cuenta que había finalizado su proceso de pensión de vejez. El 9 de octubre de 2017 reclamó pensión de vejez a COLPENSIONES siendo negada por no ser afiliado a la entidad. Agrega que cotizó 1.812,85 semanas, siendo superior la mesada pensional proyectada en el RPMPD que en el RAIS.

### **Respuestas a la demanda:**

**COLPENSIONES** expuso que no le consta lo afirmado en la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Propuso en su defensa las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, inexistencia de ineficacia del traslado y de la obligación de reconocer la afiliación en el RPMPD, genérica, imposibilidad de condena en costas.

**PROTECCION S.A.** sostuvo en términos generales que, la afiliación al RAIS es válida al haberse efectuado en forma libre y voluntaria, tal como lo prueba el formulario de afiliación suscrito, sin que exista vicio en el consentimiento. Propuso en su defensa las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, innominada.

**PORVENIR S.A.** se opuso a las pretensiones de la demanda. En términos generales sostiene que la información suministrada se encuentra acorde con las disposiciones legales, por parte de asesores debidamente capacitados, la demandante suscribió la solicitud de vinculación o traslado, acto que es válido, al haberse efectuado de manera libre, espontánea y sin presiones. Propuso las excepciones que denominó prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, enriquecimiento sin causa, genérica.

El **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** expuso que no le constan los hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas; informó que EL demandante se afilió al RAIS desde el 5 de mayo de 1997 a través de PORVENIR S.A. y luego con PROTECCION S.A.; para su caso, la fecha de redención normal del bono pensional tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2016 cuando cumplió 62 años de edad, el cual fue emitido y redimido mediante Resolución 16322 del 24 de febrero de 2017, previa solicitud de la AFP; por su parte, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, reconoció y ordenó el pago de la cuota parte de bono pensional el día 2 de febrero de 2017; en caso de aceptarse el traslado pretendido, deberá reintegrarse los dineros pagados, debidamente actualizados. Propuso la excepción de inexistencia de la obligación.

El **POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID** sostuvo que no tiene injerencia en la decisión que se adopte frente a las pretensiones de la demanda, informando que el demandante prestó servicios entre el 8 de agosto de 1978 y el 11 de septiembre de 1983, época para la cual no existía la obligación de afiliar a los empleador a ninguna caja o fondo de pensiones; habiéndose cumplido con el deber de emitir y pagar el Bono tipo A, el día 10 de febrero de 2017, en cuantía de \$36.301.803, cuya liquidación fue aceptada por el demandante a través de PROTECCION S.A. Propuso las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y buena fe.

El **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que existe pago total, por cuanto en sus bases de datos no hay petición del demandante y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ya había cobrado el porcentaje de participación del Departamento, reconocido y pagado el 23 de marzo de 2017. Solicitó que, en caso de ordenarse el traslado de régimen pensional, se ordene la devolución del Bono tipo A, con rendimientos y actualizado. Propuso como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta vinculación, pago total, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, compensación, buena fe, prescripción, genérica.

**ENKA DE COLOMBIA S.A.** admitió haber realizado cotizaciones a pensiones a favor del demandante, frente a lo demás expuso que no le consta; frente a las pensiones manifestó que ninguna está dirigida en su contra. En la primera audiencia de trámite fue desvinculada del proceso.

### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Séptimo Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 12 de noviembre de 2020, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir; absolvió a los demandados y vinculados de las pretensiones formuladas en su contra; condenó en **Costas** al demandante, fijando como agencias en derecho la suma de **\$100.000** a favor de cada una de las codemandadas.

### **Recurso de Apelación apoderado del demandante:**

**Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acceda a todas las pretensiones formuladas;** sostiene que fue probada la ineficacia de la afiliación a PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A., debiendo retornar sin solución de continuidad a COLPENSIONES, entidad que debe reconocer la pensión de vejez, por darse las causales señaladas por la jurisprudencia para tal fin; con la inversión de la carga de la prueba, las demandadas no demostraron haber suministrado la debida información, clara, completa y suficiente; no trajeron ningún medio de convicción al proceso, excepto el formulario de vinculación, presentándose vicio en el consentimiento al momento de la afiliación. Sostiene que en interrogatorio de parte se descontextualizó al demandante, para responder que, si se hubiera corregido su salario para 1992, hubiera permanecido en el RAIS, afirmando que el demandante no conoce nada de seguridad social y fue el asesor de PROTECCION S.A. quien lo indujo a error y

realizara todos esos trámites para corrección de salario, entregándole una información errada; se le entregó una reasesoría en el año 2005, diciéndole que no se quedara en el RAIS porque le iría mal y a renglón seguido le indica que si corrige el salario no le iría mal y que le igualarían la mesada. Hace referencia a Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín, afirmando que es reacio a reconocer la ineficacia del traslado de régimen pensional cuando se ha reconocido la pensión de vejez, siendo diferente el caso del demandante, quien ya venía reclamando la pensión de vejez pero no ha cobrado ninguna mesada, no se ha materializado porque no la aceptó, en el RUAF no tiene condición de pensionado, sino de afiliado; puede declararse la ineficacia porque no se afectaría la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, ya que ahí están los dineros y los bonos pensionales, los cuales deben ser devueltos a los emisores. La situación se puede retrotraer porque no se ha consolidado.

### **Alegatos de conclusión:**

La apoderada de **COLPENSIONES** solicita se confirme la Sentencia de Primera Instancia, afirmando en términos generales, que en el proceso no está probado, que el traslado se hubiera dado por falta de información o por una información insuficiente, ya que la asesora del fondo privado le suministró la información suficiente para generar un grado de confiabilidad que llevó a optar por la AFP privada; hecho convalidado al solicitar la pensión de vejez y la redención de los bonos pensionales expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de lo que se concluye, que la voluntad del demandante no era otra que continuar con su afiliación en el fondo privado, circunstancias que permiten concluir que el traslado fue voluntario, libre y consentido.

El apoderado del **demandante**, reitera los argumentos expuestos en el recurso de Apelación, respecto a que el Juzgado descontextualizó lo dicho por el demandante en el interrogatorio de parte, que fue producto de una inducción a

error por parte del asesor de PROTECCION S.A.; así mismo, si bien es cierto, el señor Molina Pérez reclamó la pensión de vejez y le fue reconocida por la citada AFP mediante comunicado del 17 de julio de 2017, el acto no se ha materializado ni ha surtido efectos jurídicos, al haber sido rechazada por el demandante, quien no ha recibido una mesada pensional y aparece en el RUAF en estado activo-cotizante.

Por su parte, la apoderada del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** reitera lo expuesto en la respuesta a la demanda, afirmando que no debió integrarse al proceso, al haber pagado en forma total lo que correspondía.

A su vez, el apoderado de **PORVENIR S.A.**, solicita se confirme la decisión de Primera Instancia, afirmando en términos generales, que en el acto jurídico celebrado entre las partes, no se probó ninguno de los presupuestos legales para declarar la nulidad absoluta o la ineficacia del acto jurídico, por el argumento jurisprudencial de la falta del consentimiento informado, cumpliendo con la carga probatoria de acreditar que suministró la información suficiente y objetiva al momento de la vinculación, como se refleja en el formulario de afiliación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

## CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

### **Conflicto Jurídico:**

**El conflicto jurídico a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Decisión de Primera Instancia o si como lo dice la *a quo*, una vez reconocida la pensión, la falta de información se entiende superada con el nuevo acto jurídico.**

**Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, confirmar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:**

**Sobre el tema objeto de estudio, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia SL373 del 10 de febrero de 2021 M.P. doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, abandonó el criterio sentado desde la Sentencia CSJ SL del 9 de septiembre de 2008, radicado 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado; poniendo de presente varias situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado, calidad que indicó, da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.**

**En cuanto a los Bonos Pensionales, como los redimidos y pagados a PROTECCION S.A. a favor del demandante por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, expuso que pudo haberse pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de**



las mesadas pensionales, por lo que en tal caso, habría que reversar esas operaciones; lo cual consideró no factible, por cuanto el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

**Para el caso de pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima** –como es el caso de la reconocida al demandante–, señaló que volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía; que como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado, lo que a su vez, se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el Bono.

Explicó que, **en estos casos de solicitud de ineficacia de traslado de régimen de pensionado, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida; concluyendo que no es factible retrotraer tales situaciones, habiendo un hecho consolidado que no permite en un proceso, analizarse la ineficacia de traslado de régimen.**

Por lo anterior y en vista de que el **artículo 234 de la Constitución Política**, contempla que **la H. Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria** y tiene atribución de actuar como Tribunal de Casación (art. 235) y que dicha Corporación, en decisión **AL8458 de 2017 Radicado 77136 M.P. doctor Gerardo Botero Zuluaga**, indicó que, a partir de su

conformación en el año 1886, **se le asignó como finalidad principal la unificación de la jurisprudencia**; además que, la **H. Corte Constitucional en Sentencia SU 113 de 2018**, señaló que el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre, encargados de unificar la jurisprudencia dentro de su respectiva jurisdicción; **la suscrita Magistrada Ponente en este asunto, recientemente<sup>1</sup> acogió el criterio señalado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL373 del 10 de febrero de 2021** y por tanto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra no procedente, declarar la ineficacia de traslado de régimen con todas sus consecuencias, cuando se trata de un pensionado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), como en este caso.

**En el asunto bajo estudio**, para adoptar la decisión recurrida, consideró el Juzgado, en términos generales, que en interrogatorio de parte, el demandante aceptó que de haberse corregido el salario base para el bono pensional del año 1992, hubiera permanecido en el RAIS en calidad de pensionado; así mismo, que el actor solicitó y le fue reconocida la pensión de vejez por parte de PROTECCION S.A., a partir de diciembre de 2016 y que una vez reconocida la prestación económica, la falta de información se entiende superada con el nuevo acto jurídico; teniendo el afiliado la posibilidad de alegar la falta de información en forma previa al reconocimiento de la pensión de vejez y no con posterioridad.

En lo referente a que no se ha consolidado la condición de pensionado para el caso del demandante, por haber rechazado la pensión de vejez reconocida por PROTECCION S.A., debe indicarse que, conforme a la prueba obrante en el

---

<sup>1</sup> Desde Sentencia del 21 de abril de 2021, Radicado 05001310501620180043701

expediente, el señor Molina Pérez afirmó desde la demanda, que reclamó la pensión de vejez en el RAIS, en noviembre de 2016, reiterada el día 6 de junio de 2017; reconoció que la AFP le comunicó el reconocimiento de la prestación económica mediante comunicación del 17 de julio de 2017, la cual aportaron ambas partes a folios 56, 57 y 546; para su caso, se dio en la modalidad de garantía de pensión mínima, con efectos a partir del 2 de diciembre de 2016, en cuantía de \$2.590.798,69, con 13 mesadas al año y un retroactivo pensional en cuantía de \$17.913.055,69, liquidado hasta el 30 de junio de 2017.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la fecha de redención normal del Bono pensional a favor del demandante, tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2016, cuando cumplió 62 años de edad, Bono que fue emitido y redimido mediante Resolución 16322 del 24 de febrero de 2017, previa solicitud de la AFP; explicó que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, también reconoció y ordenó el pago de la cuota parte de Bono pensional correspondiente, el día 2 de febrero de 2017; observándose que conforme a la liquidación aportada por la Oficina de Bonos pensionales, el valor redimido y pagado por concepto de Bonos pensionales, a favor del demandante, fue de \$249.215.000 (folio 335).

De otro lado, en audiencia de trámite, previo requerimiento del Juzgado, la apoderada de la AFP PROTECCION S.A. exhibió documento mediante el cual el demandante autorizó el trámite de emisión del Bono pensional, documento y firma que fueron reconocidos por el demandante, quien manifestó que no aceptó la pensión de vejez reconocida, por considerar que el monto debía ser del doble o más y no estaba de acuerdo con la liquidación efectuada, aduciendo que autorizó a la AFP para tramitar el Bono, pero no con el salario base de \$275.800 para el año 1992, como aparece en la liquidación, sino con el real, que afirma debe ser de \$418.000.

Respecto al tema de la base salarial para el año 1992, se observa que según certificado expedido por la Jefe Departamento de Administración y el Jefe División Gestión Humana de Enka de Colombia S.A., de fechas 9 de junio y 25 de agosto de 2005, el salario devengado, cotizado y reportado al Seguro Social a 30 de junio de 1992, fue de \$418.233 (folios 46 y 47); no obstante, en la historia laboral “tipo CAN” de COLPENSIONES para los periodos mayo y junio de 1992 aparece con salario de \$275.850 y en la liquidación del Bono pensional se tuvo en cuenta \$275.850 para el 30 de junio de 1992 (folio 335).

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que, tal como lo sostuvo el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y explicó la *a quo*, el litigio fijado giró en torno a determinar si fue eficaz o no el traslado de régimen pensional, sin que se hubiera incluido lo referente a la base salarial para liquidar el Bono pensional; por tanto, el hecho de estar en desacuerdo con la base salarial tenida en cuenta para la liquidación del Bono pensional y/o con el valor de la mesada pensional que ya le fue reconocida en el RAIS, trámites que fueron adelantados por la AFP previa solicitud del demandante, no le restan efectos jurídicos a su condición de pensionado, contando el demandante con las herramientas jurídicas para controvertir ese tema, con el fin de obtener una reliquidación del Bono pensional o a un Bono complementario, como lo explicó la *a quo* y por consiguiente, un eventual reajuste de la mesada pensional. Tema que escapa al objeto conflicto jurídico planteado en este proceso laboral, para cuya definición, posiblemente sería necesaria la vinculación de Enka de Colombia S.A., por ser el empleador que está certificando el mayor salario para el año 1992, entidad que fue desvinculada del proceso en la audiencia de trámite y juzgamiento, sin oposición alguna frente a la decisión del Despacho.

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia.

### **COSTAS:**

**No se condenará en Costas en esta Segunda Instancia** al no haberse causado, conforme a lo indicado en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso y al haberse dado un cambio de criterio jurisprudencial en el trámite del proceso.

### **DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** se revisa; según lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

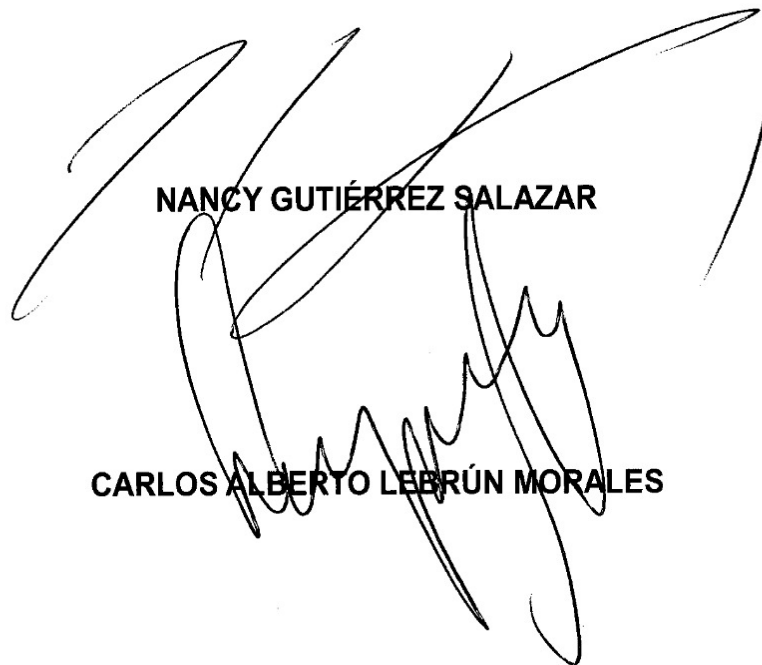
**SEGUNDO:** En esta Segunda Instancia no se condena en Costas, según lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 806 de 2020), se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

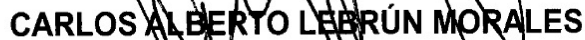
**Los Magistrados,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
Estados No. **079** del **10 de mayo de 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>